LA IMPUNIDAD QUE ANULA LA PROPORCIONALIDAD DE LAS SANCIONES EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR: EL CASO CONCRETO DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS

SUMARIO: 1. *Introducción.* 2. *Caso concreto.* 3. *Criterio de la Sala Superior al resolver el SUP-REP-500/2022.* 4. *La realidad de los votos particulares.* 5. *La impunidad que anula la proporcionalidad de las sanciones.*

Laura Berenice Sámano Ríos¹

1. Introducción

La falta de sanción de una conducta realizada fuera de los estándares legales, necesariamente se convierte en un acto de impunidad. La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se encuentra legalmente imposibilitada para sancionar a cualquier persona servidora pública que cometa una infracción electoral. Lo anterior, atendiendo al criterio sostenido por la Sala Superior al resolver el recurso de revisión electoral SUP-REP-500/2022, en el que determinó que, conforme a lo previsto en los artículos 456 y 457 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las resoluciones que emita dicha sala especializada, solo serán de carácter declarativo, pero, no sancionatorio.

2. Caso concreto

El entonces Partido Duranguense presentó denuncias contra diversos servidores públicos estatales y municipales, atribuyéndoles la difusión de cápsulas informativas en televisión en las que promocionaban el nombre, la imagen y la voz del presidente municipal de Durango, así como de la presidenta del DIF en dicho municipio y de la Directora de Comunicación Social.

La Sala especializada, al resolver el procedimiento sancionador concluyó que dichas personas servidoras públicas habían cometido las siguientes infracciones: 1) promoción personalizada; y, 2) uso indebido de recursos públicos, por lo que, atendiendo a lo previsto en la Ley General Electoral, dieron vista al Congreso de Durango, a la Contraloría Municipal de Durango y al OIC de la Dirección Municipal de Comunicación Social, también de Durango para que, *conforme a su normativa* determinaran lo conducente respecto de las faltas cometidas por dichas personas servidoras públicas.

¹ Secretaria General de Acuerdos de la Sala Regional Especializada. Licenciada y Maestra en Derecho por la UNAM; y, Doctorante en Derecho por la Universidad Panamericana.

Dichas autoridades manifestaron causas, tanto materiales como legales, que les impedían cumplir la sentencia, motivo que dio origen a la apertura del incidente de inejecución. La Sala Especializada resolvió que, tratándose de faltas electorales cometidas por servidores públicos, las sentencias que las acreditan solo tienen carácter declarativo, pero no sancionatorio.

La Sala Especializada, resolvió que la LGIPE no prevé sanciones para las faltas electorales cometidas por personas servidoras públicas, solo faculta para dar vista a los superiores jerárquicos, a fin de que sean ellos quienes impongan las sanciones, conforme a las leyes que los rigen, esto es, conforme a las leyes que rigen el servicio público.

Esta resolución interlocutoria fue recurrida ante la Sala Superior por el partido Duranguense, que dio origen al SUP-REP-500/2022.

3. Criterio de la Sala Superior al resolver el SUP-REP-500/2022

La Sala Superior concluyó que fue correcto que la Sala Especializada tuviera la ejecutoria por cumplida solo con haber dado vista al Congreso, al OIC y a los superiores jerárquicos de los infractores, pues la LGIPE no prevé sanciones para esta clase de sujetos activos, ni tampoco, mayores facultades para exigir el cumplimiento.

Por tanto, las sentencias de la Sala Especializada, en estos casos, debe tenerse cumplida, *solamente con la declaración de la infracción, la atribución de la responsabilidad y la vista que se dé a los superiores jerárquicos o a las autoridades encargadas de sancionar*, pues la ley electoral, específicamente el artículo 456² de LGIPE, no establece expresamente facultades a la Sala para imponer sanciones, ni tampoco para verificar que alguna de las autoridades a las que se les dio vista³ con la resolución que declara la infracción, haya impuesto la sanción correspondiente a las o los infractores electorales.

² El artículo 456 de la LGIPE establece un catálogo de sanciones atendiendo a la calidad de los sujetos infractores y de manera diferenciada, de tal manera que contempla la imposición a partidos políticos, agrupaciones políticas, aspirantes, precandidatas o candidatas a cargos de elección popular, candidatas o candidatos independientes, ciudadanos, dirigentes y afiliados a los partidos políticos, o de cualquier persona física o moral, observadores electorales u organizaciones de observadores electorales, concesionarios de radio y televisión y, organizaciones de ciudadanos que pretendan constituir partidos políticos, pero, en ninguno de los supuestos de la norma, existen reguladas sanciones que puedan ser aplicables a personas servidoras públicas.

³ El artículo 457 de la LGIPE establece que cuando alguna persona servidora pública del ámbito federal, estatal o municipal incurran en una infracción electoral, *se dará vista al superior jerárquico y, en su caso, presentará queja ante la autoridad competente por hechos que puedan constituir responsabilidades administrativas o las denuncias o querellas ante el ministerio público*, para que procedan en términos de las legislaciones aplicables.

4. La realidad de los votos particulares

La resolución al recurso de revisión que se comenta, fue resuelta por mayoría de votos. Fueron la magistrada Janine Otálora y el magistrado Felipe Fuentes, quienes disintieron con el sentido de la resolución y expusieron los siguientes argumentos, que estimo de relevancia:

1. Determinar que las sentencias de la Sala Regional solo son declarativas cuando la infracción electoral la comete un servidor público, es atentar contra el principio de cumplimiento efectivo de las sentencias y de seguridad jurídica.
2. La vista que se da a los superiores jerárquicos no implica analizar nuevamente los hechos para determinar si existe o no alguna infracción o responsabilidad, pues lo único que deben hacer es, imponer la sanción a la o el servidor público infractor, *conforme al marco jurídico de responsabilidades administrativas de los servidores públicos.*⁴
3. Para que el sistema de infracciones en materia electoral *sea realmente eficaz*, es necesario que las personas servidoras públicas que cometan alguna de ellas, sean sancionadas en términos de las leyes de responsabilidades administrativas que las rijan.⁵
4. Las facultades de la Sala Especializada para exigir el cumplimiento de las sentencias no se agotan solo con dar vista a los superiores jerárquicos de las o los infractores, debe verificar que se les imponga la sanción, para ello, pueden fundar y motivar debidamente dichos requerimientos con lo dispuesto en los artículos 17 de la CPEUM, así como el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de lo contrario, no habría acceso a la justicia integral.

No puedo dejar de opinar que los argumentos del voto particular se encuentran absolutamente sostenidos en la realidad, la falta de sanción no permite que se inhiba la comisión de conductas ilícitas, por tanto, los servidores públicos, podrán realizar actos de campaña valiéndose de los recursos públicos con los que cuentan, denostando a otros candidatos, ejerciendo violencia política contra hombres o mujeres; promocionando a algún candidato o candidata, o algún otro y el Tribunal Electoral podrá acreditar responsabilidad en la comisión del ilícito, pero no serán sancionados porque ninguna autoridad tiene facultades para hacerlo, por lo que se convierte en una veta de oportunidad para violentar constantemente la

⁴ Si bien es correcta la afirmación, lo cierto es que, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, tampoco existe norma que faculte a las autoridades superiores jerárquicas de la o el infractor, a imponerles sanciones por la comisión de faltas electorales.

⁵ Existe una Ley General de Responsabilidades Administrativas, pero, también, existen leyes locales que regulan la función de las y los servidores públicos, mismas que pueden establecer reglas y sanciones diversas; hasta ahora, no existe alguna que prevea facultades sancionadoras cuando alguna o algún servidor público cometen faltas administrativo electorales. Ni tampoco se prevé sanción para este tipo de infracciones.

ley y los principios rectores del derecho electoral, por tanto, una manera de lastimar la Democracia mexicana.

5. La impunidad que anula la proporcionalidad de las sanciones

En el caso analizado, se acreditó que tanto el presidente municipal de Durango, como la Presidenta y Directora de Comunicación Social del DIF municipal (ellas y él servidores públicos), incurrieron en promoción personalizada y en uso indebido de los recursos públicos que tienen a la mano, al haber creado y difundido diversos spots. No obstante que se acreditó la existencia de dicha conducta infractora, al momento de resolver el procedimiento sancionador, la Sala Especializada solo pudo dar vista a los superiores jerárquicos de dichas personas infractoras, para que fueran ellos quienes les impusieran la sanción.

En este sentido, ni el Tribunal Electoral, ni los superiores jerárquicos, contralorías, congresos o Tribunales de Justicia Administrativa federal o locales cuentan, ya sea en la LGIPE o en la LGRA, con alguna norma que les permita imponer sanciones a las o los servidores públicos que hubieren incurrido en una falta electoral, de tal suerte que las personas servidoras públicas pueden cometer toda clase de infracciones electorales y no van a ser sancionadas, por tanto, no existe proporcionalidad entre la infracción y la sanción.

Es claro observar que este vacío normativo impide a las autoridades jurisdiccional electoral y administrativa sancionadora en responsabilidades, imponer la sanción a cualquier persona servidora pública que cometa alguna falta electoral en el ejercicio de su cargo, lo que se traduce en una absoluta impunidad.

Se trata de un problema que urge resolver, pues como uno de los magistrados mencionó en su voto particular, es necesario dotar de las herramientas legales correctas tanto a la autoridad jurisdiccional electoral, como a la autoridad administrativa sancionadora en responsabilidades para que el sistema de justicia sea eficaz, para ello, se requiere modificar, necesariamente el artículo 457 de la LGIPE, así como la LGRA que establece la comisión de faltas graves, para que, una vez acreditada la comisión de la infracción electoral, se pueda sancionar en el régimen de responsabilidades de los servidores públicos.

Asimismo, debe agregarse que, como solución inmediata a este problema, la Sala Regional sí podría elevar la vista a una denuncia o queja ante las contralorías correspondientes, como en el caso, por haber advertido el uso indebido del recurso público en las acciones de propaganda personalizada del presidente municipal de Durango, pues esta falta se califica como grave en la LGRA.

Además, podría dar vista a la Fiscalía Electoral por este mismo hecho que se tipifica como delito en el artículo 11, fracción III de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, pues si bien, no habrá sanción electoral, podrá remitir la copia certificada del expediente tanto a la autoridad administrativa como a la penal, para que realicen las acciones que las ley les permite para ubicarlos en las hipótesis

normativas establecidas previamente a la comisión de los hechos ilícitos en cualquiera de esas vías, a fin de que estos actos no queden impunes y se logre una eficacia del sistema, hasta en tanto se modifique la normativa electoral y la de responsabilidades tratándose de infracciones electorales cometidas por personas servidoras públicas.

FUENTES CONSULTADAS

-Sentencia y resolución incidental del procedimiento especial sancionador SRE-PSC-14/2018.

-Resolución del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-500/2022.